plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOC, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y formular cuantas reclamaciones o alegaciones estimen oportunas. El expediente podrá ser examinado en las Dependencias de Secretaría. En el caso que no fueran presentadas reclamaciones durante el plazo indicado, se entenderá definitivamente aprobado el expediente de modificación presupuestaria».

Marina de Cudeyo, 3 de octubre de 2003.—El alcalde, Severiano Ballesteros Lavín.

03/11719

AYUNTAMIENTO DE NOJA

Aprobación definitiva del presupuesto general de 2003

Aprobado definitivamente el presupuesto general de este ayuntamiento para el ejercicio 2003, se hace público de conformidad con lo establecido en el artículo 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, presentando el siguiente resumen por capítulos:

ESTADO DE INGRESOS

CAP.1	INGRESOS DIRECTOS	2.218.700,00 EUROS
CAP.2	INGRESOS INDIRECTOS	340.000,00 EUROS
CAP.3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.871.300,00 EUROS
CAP.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	427.000,00 EUROS
CAP.5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.839.440,00 EUROS
CAP.6	ENAJENACION INVERS.REALES	760.000,00 EUROS
CAP.7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	652.000,00 EUROS
CAP.8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 EUROS
CAP.9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 EUROS
	TOTAL	10.108.440,00 EUROS

ESTADO DE GASTOS

CAP.1	GASTOS DE PERSONAL	1.984.920,12 EUROS
CAP.2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.130.702,10 EUROS
CAP.3	GASTOS FINANCIEROS	113.300,00 EUROS
CAP.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	878.854,78 EUROS
CAP.6	INVERSIONES REALES	2.943.980,32 EUROS
CAP.7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.210,00 EUROS
CAP.8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 EUROS
CAP.9	PASIVOS FINANCIEROS	330.000,00 EUROS
	TOTAL	9.416.967,32 EUROS

Noja, 6 de octubre de 2003.—El alcalde-presidente, Jesús Díaz Gómez.

03/11667

AYUNTAMIENTO DE PENAGOS

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 8/03.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de octubre de 2003, el expediente de modificación de créditos, número 8 dentro del Presupuesto General para el año 2003, estará de manifiesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por espacio de quince días hábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo plazo podrán los interesados legítimos interponer frente al mismo las reclamaciones y observaciones que estimen pertinentes.

Penagos, 3 de octubre de 2003.—El alcalde, José Francisco Montejo López.

03/11682

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE AGUAYO

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 2/03.

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el día 26 de septiembre de 2003 el

expediente de modificación de créditos número 2/2003, se expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles al objeto de que por los interesados legítimos se presenten las alegaciones o reclamaciones que estimen oportunas. De no presentarse ninguna, se considerará elevado a definitivo el presente acuerdo inicial.

San Miguel de Aguayo, 6 de octubre de 2003.—El alcalde, Saturnino Gutiérrez López.

03/11735

AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

Aprobación inicial y exposición pública de expediente de transferencia de crédito.

En sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 3 de septiembre de 2003 se ha aprobado inicialmente un expediente de transferencia de crédito por importe de 174.495,21 euros.

El citado expediente estará expuesto al público por espacio de quince días de conformidad con lo establecido en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y RD 500/90, de 20 de abril, durante los cuales los interesados podrán examinarle y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Si transcurrido el plazo de exposición pública del expediente no se presentase ninguna alegación o reclamación contra el mismo, quedará aprobado definitivamente.

Santoña, 7 de octubre de 2003.—La alcaldesa, María del Puerto Gallego Arriola.

03/11668

4.2 ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Secretaría General

Notificación de resolución de expediente sancionador número 78/03.

No habiéndose podido notificar al interesado a través del Servicio de Correos la Resolución correspondiente al expediente sancionador número 78/03, se hace público el presente anuncio en cumplimiento de lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: 78/03.

- Nombre y apellidos: Jean Claude Francois Couche.

- Domicilio: Calle María Cristina, 1E - 1º B de Santander.

Resolución: Multa de 150 euros.

« Visto el expediente sancionador número 78/03 incoado a don JEAN CLAUDE FRANCOIS COUCHE como titular del establecimiento «NIÁGARA», de Santander, por una infracción al artículo 4 del Decreto 72/1997, de 7 de julio, calificada como leve, se resuelve lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- La Policía Local de Santander denunció que el establecimiento «NIÁGARA», de Santander, permanecía abierto al público, el día 16 de marzo de 2003 a las 4,50 horas con 25 clientes en su interior.

SEGUNDO.- Con fecha 29 de abril de 2003 se acordó la iniciación de expediente sancionador a DON JEAN CLAUDE FRANCOIS COUCHE por los hechos descritos en el antecedente primero. El interesado formuló alegaciones negando los hechos imputados y solicita la práctica de la prueba.

TERCERO.- Recibida la ratificación de los agentes denunciadores, con fecha 12 de junio de 2003, el instructor del expediente formuló propuesta de resolución junto con el acuerdo denegatorio de la prueba solicitada en el sentido de sancionar al interesado con multa de 150 euros

25.000 pesetas por la infracción leve, cometida el día 16 de marzo de 2003. El imputado dentro del plazo reglamentariamente establecido presentó alegaciones reiterándose en las anteriores.

CUARTO.- De las actuaciones practicadas se consideraran probados los siguientes hechos:

El establecimiento «NIÁGARA» permanecía abierto al público el día 16 de marzo de 2003 a las 4,50 horas con 25 clientes en su interior.

Dicho establecimiento está encuadrado dentro del Grupo E, por lo que su horario máximo de cierre en invierno son las 3,30 horas, ampliándose en una hora más los viernes, sábados y vísperas de fiesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, el expediente ha sido tramitado conforme a lo dispuesto en los artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

II.- El recurrente niega los hechos imputados, a este respecto, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana, declarado conforme con la Constitución en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de noviembre de 1993 (sentencia 341/93), establece que «En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la presente ley, las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad que hubieren presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los inculcados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles».

Así pues, el citado precepto configura, según Sentencia de 21 de septiembre de 1999 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (rec. núm. 1.390/98) una presunción legal de certeza de las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad que hubieren presenciado los hechos, en las materias objeto de la ley, previa ratificación en caso de que tales hechos fueran negados por los inculcados. Esta presunción es desde luego, «iuris tantum», es decir, no configura una verdad absoluta e incontestable, sino que desplaza al denunciado la carga de probar que los hechos descritos o narrados no existieron o se desarrollaron de otro modo. Del contenido normativo del artículo 37, de preceptiva interpretación estricta y rigurosa, por encontrarnos ante un precepto que configura la prueba de los hechos que determinan el ejercicio de la potestad sancionadora, se desprenden los siguientes requisitos: a) que la denuncia la formulen los agentes que hayan presenciado directamente los hechos, b) la ratificación de los mismos agentes en los hechos o de uno de ellos al menos, cuando fueran negados por los afectados.

Constando en el expediente que nos ocupa denuncia formulada por agentes de la autoridad y su posterior ratificación, reuniendo aquella los caracteres necesarios para otorgarle eficacia probatoria, la misma debe considerarse como prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia alegada por el interesado.

III.- En cuanto al no recibimiento del expediente a prueba con propuesta de la testifical de los empleados y otro, así como de los agentes denunciadores, hay que manifestar que el derecho a la prueba del interesado en el procedimiento lo es a la prueba pertinente o procedente y suficiente, pero no a otra que desmerezca dichos calificativos, y en tal sentido se pronuncian indubitable e indubitablemente los artículos 80.2, 80.3 y 137.4 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como el artículo 17.2 del ya mencionado Real Decreto 1398/1993, de 4 de

agosto, según los cuales resultarán improcedentes o innecesarios los medios de prueba propuestos que recaigan sobre hechos que la propia Administración tenga por ciertos o veraces, presunción de certeza o veracidad que la Ley predica de los hechos constatados en las denuncias policiales y que - por tanto - no pueden ser puestos en tela de juicio por la Administración - que ha de actuar, por imperativo constitucional, con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho - no pudiendo pretenderse por el interesado que la Administración acepte unas declaraciones testimoniales de personas particulares a los que la Ley, respectivamente, ni otorga la condición de autoridad pública ni dispone la presunción de certeza, no pudiendo tales testimonios desvirtuar por sí solos los hechos constatados por los policías denunciadores, no pudiéndose pretender tampoco que la Administración someta a los agentes denunciadores a careos o pliegos de preguntas sobre hechos denunciados y ratificados con presunción de veracidad por tales agentes de la autoridad, lo que convierte a tales careos y/o pliegos de preguntas en pruebas innecesarias cuyo resultado no puede alterar el sentido de la resolución final a favor del presunto responsable.

IV.- Los hechos descritos constituyen un incumplimiento del artículo 4 del Decreto 72/1997, de 7 de julio por el que se establece el régimen general de horarios de establecimientos y espectáculos públicos y actividades recreativas. Que como expresa de forma taxativa el artículo 5 del citado Decreto, llegada la hora establecida para el cierre, los locales y establecimientos deberán estar totalmente desalojados, debiendo los responsables del local, poner en conocimiento de los clientes el cierre con antelación.

El artículo 9 de referido Decreto señala que las infracciones a lo establecido en el mismo y disposiciones que lo desarrollen serán sancionadas conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

V.- Los hechos objeto de este procedimiento son tipificados por la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana de conformidad con lo establecido por el artículo 26 e) como infracción leve.

El artículo 28.1 a) de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, de Seguridad Ciudadana, establece que las infracciones leves podrán ser sancionadas con multa de hasta 300,51 euros. El artículo 30.2 de dicha norma establece los criterios a que habrá que atender para concretar la sanción que proceda imponer. Así señala que las autoridades sancionadoras tendrán en cuenta idénticos criterios que los establecidos en el apartado 1, es decir, la gravedad de las infracciones, la cuantía del perjuicio causado y su posible trascendencia para la prevención, mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana, atendiendo además al grado de culpabilidad, reincidencia y capacidad económica del infractor, para graduar las sanciones que proceda imponer y, en su caso, para graduar la cuantía de las multas y la duración de las sanciones temporales.

VI.- De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 72/1997, de 7 de julio, por el que se establece el régimen general de horarios de establecimientos y espectáculos públicos y actividades recreativas, el órgano competente para imponer sanciones por infracciones leves es la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Esta Secretaría General, de acuerdo con todo lo anterior, RESUELVE sancionar a DON JEAN CLAUDE FRANCOIS COUCHE, titular del establecimiento «NIÁGARA», de Santander, con multa de 150 EUROS por la infracción leve cometida el día 16 de marzo de 2003, como responsable de los hechos objeto del expediente.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso de alzada, ante el excelentísimo señor consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente a la publicación de esta notificación.

Transcurrido el período citado sin que se haya impugnado la resolución recaída, deberá hacer efectiva la sanción, para lo cual deberá recoger en el plazo de un mes, en la Sección de Juego y Espectáculos, calle Casimiro Sainz, 4 de Santander, el documento de ingreso «Modelo 046», procediéndose, en caso de no hacerlo, a su cobro por vía de apremio».

Santander, 2 de octubre de 2003.—La secretaria general, Jezabel Morán Lamadrid.
03/11702

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera

Citación para notificación de procedimiento de recaudación en período voluntario.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y habiéndose intentado por dos veces la notificación a través del servicio de correos, a las personas, ente/s jurídicos o sus representantes, a quienes no ha sido posible notificar por causas no imputables a esta Dirección General, es por lo que a través del presente anuncio se les cita para que comparezcan en las oficinas de la Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, sita en la calle Hernán Cortés, número 9, 4º en Santander.

En virtud de lo anterior dispongo que los citados, o sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOC, en horario de nueve a catorce horas, para notificarles por comparecencia actos administrativos que les afectan cuyas referencias constan seguidamente, con la advertencia de que si no atienden este requerimiento, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Acto a notificar: Procedimiento de recaudación en período voluntario.

-Apellidos y nombre o razón social: Martín Navarro, Andrés.

-NIF: 13.784.947-N.

-Número liquidación: 0472000201000.

Santander, 2 de octubre de 2003.—El director general de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, Salvador Blanco García.

03/11576

DELEGACIÓN ESPECIAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Dependencia Regional de Recaudación

Citación para notificación de providencia de apremio a deudor.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria, según la redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación a la interesada o su representante, por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone de manifiesto mediante el presente anuncio que se encuentran pendientes de notificar los actos cuya interesada, número de justificante y procedimiento se especifican a continuación:

Órgano responsable: Dependencia Regional de Recaudación, Unidad de Adscripción 39852.

Procedimiento: Procedimiento de recaudación. Notificación de providencia de apremio. Clave de liquidación: K160103089097800.

Obligada tributaria: «A. Moyano, S. L.».

Número de expediente: B39051297 AMO.

En virtud de lo anterior, dispongo que la sujeto pasiva, obligada tributaria indicada anteriormente o su representante debidamente acreditado deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» que corresponda, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en la Unidad de Recaudación, Delegación de la AEAT en Cantabria, avenida Calvo Sotelo, 27-3.ª planta, Santander, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a la interesada que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Santander, 2 de octubre de 2003.—El jefe regional de Recaudación, Manuel J. Valentin-Fernández Santacruz.

03/11474

DELEGACIÓN ESPECIAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Dependencia Regional de Recaudación

Anuncio de subasta de bien-mueble por embargo en procedimiento de apremio.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la AEAT de Cantabria,

HACE SABER: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recaudación aprobado por el R.D. 1.684/1990 de 20 de Diciembre, habiéndose dictado acuerdos con fecha 26 de Junio de 2003 decretando la venta de los bienes embargados en procedimiento administrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que se detallarán a continuación, mediante subasta que se celebrará el día 10 de DICIEMBRE del 2003, a las 10:00 horas en la DELEGACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA EN CANTABRIA. AVDA. DE CALVO SOTELO, 27 SANTANDER.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento, se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en la subasta, de lo siguiente:

PRIMERO: Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.

SEGUNDO: La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

TERCERO: Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de la Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el importe del depósito, o del NRC justificativo de su constitución telemática de acuerdo con la Resolución 5/2002, de 17 de Mayo, del Director General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la página Web de la Agencia Tributaria <http://www.aeat.es/>, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02), de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.